

Crónica del mes

Junio

Junio fue otro mes de diálogos y de guerra. El día 2 finalizó la ronda de negociaciones, realizada en Caraballeda, Venezuela. El 16, se inició una nueva ronda, en Querétaro, México, la cual concluyó el 22. En ninguna de las dos se alcanzaron acuerdos sobre ningún punto, aunque sí se avanzó en el logro de algunos consensos mínimos sobre cuestiones de fondo, según la opinión del mediador de la ONU, Alvaro de Soto, y de los propios interlocutores directos. La gestión de Cristiani llegó a su segundo aniversario sin poder concertar el cese del fuego con el FMLN.

Como en los encuentros anteriores, la ronda de Caraballeda volvió a atascarse en la cuestión de la Fuerza Armada, luego de que el gobierno presentara más de cuarenta enmiendas al documento de consenso que la ONU había preparado sobre dicho tema. Incluso a nivel de la terminología, la delegación gubernamental insistió en replantear el problema de la "depuración" del ejército como mera "evaluación", aduciendo que aquel término tenía feas connotaciones "peyorativas", las cuales herían la susceptibilidad de la Fuerza Armada. Asimismo, reiteró la pretensión castrense de hacer participar por lo menos a dos militares en la comisión que, según la propuesta de la ONU, estaría encargada de realizar dicha "evaluación". Por otra parte, el gobierno rechazó también la propuesta del FMLN para introducir a la agenda de la discusión el tema económico-social. El encuentro concluyó sin más acuerdo explícito que el de volver a

reunirse en México, durante la segunda quincena del mes.

Esta situación de *impasse* de las negociaciones, aunada al estancamiento del proceso judicial del caso de la UCA —el 3 de junio venció el plazo del período de pruebas sin que se lograran avances sustanciales— fue el trasfondo de dos mociones surgidas en el Congreso norteamericano en relación a la ayuda militar para el ejército salvadoreño. El 5 de junio, un grupo de nueve prominentes congresistas envió a Bush una misiva en la cual lo instaban a no enviar más ayuda militar al gobierno salvadoreño para "no perturbar el proceso de negociaciones durante esta etapa tan delicada". En concreto, los congresistas sugerían dos medidas: continuar reteniendo los 42.5 millones de dólares que Bush ya había decidido desembolsar, de los fondos correspondientes al año fiscal de 1991; y posponer por lo menos hasta septiembre cualquier decisión sobre los 85 millones de dólares de ayuda militar, solicitados por Bush para el año fiscal de 1992. "El descongelamiento de estos fondos —aducían los congresistas— quitaría la presión sobre el gobierno salvadoreño con respecto a las negociaciones y el caso de los jesuitas, y con respecto a los derechos humanos en general". Un día después, el 6 de junio, el comité de reglas de la Cámara de Representantes aprobó una resolución en favor de esta segunda moción.

El 7 de junio, el presidente Cristiani intentó disimular su contrariedad por la disposición de la

Cámara de Representantes, calificándola como una "medida atinada" que podía ayudar para que "el proceso de paz se pueda desarrollar sin influencia alguna". No obstante, insinuó tácitamente que la ayuda militar era necesaria, ya que "el FMLN no ha desistido de continuar el flujo de armas hacia el interior del país". "Ultimamente —dijo— hemos visto cómo han introducido misiles tierra-aire SAM-16, que son más sofisticados que los devueltos al gobierno nicaragüense hace unos cuantos meses". Y añadió: "Ciertamente, sectores sandinistas son los que continúan brindándole apoyo al FMLN, lo cual, creo yo, es a todas luces condenable".

Cuatro días después, el 11 de junio, Cristiani inició una visita oficial de tres días a Washington, con el propósito declarado de exponer y discutir la situación salvadoreña con el presidente Bush, sectores del Congreso y diversos círculos políticos y periodísticos norteamericanos. A su arribo a Washington, el propio Cristiani manifestó que "el tema predominante" de su visita era "la búsqueda de la paz en El Salvador", e indicó que la ayuda económica y militar de Estados Unidos a su gobierno era solamente parte del temario.

La agenda de la visita estuvo bastante cargada. La tarde del día 11, tras su arribo a la base militar Andrews, al sureste de Washington, a bordo de un avión presidencial norteamericano que lo recogió en Miami, Cristiani fue recibido por el subsecretario de Estado, Lawrence Eagleburger, en las inmediaciones del Obelisco, de donde se trasladó a *Blair House*, residencia oficial de los jefes de Estado invitados por el gobierno norteamericano. Una hora después, sostuvo una primera reunión de trabajo, en la propia *Blair House*, con empresarios norteamericanos, quienes deseaban escuchar de él mismo las posibilidades de inversión en El Salvador. Más tarde, cenó con varios congresistas interesados en el tema salvadoreño, entre ellos el senador de Connecticut, Christopher Dodd, partidario de congelar el 50 por ciento de la ayuda militar destinada a El Salvador para el año fiscal de 1992.

La mañana del miércoles 12 la inició con un desayuno de trabajo con otros congresistas. Posteriormente, se dirigió a la Casa Blanca, para una

entrevista con el presidente Bush en la oficina oval. Al darle la bienvenida, Bush le manifestó: "debo decirle que cuenta usted con nuestro respeto y apoyo total. Y no debe haber duda alguna de ello ni en este país ni en El Salvador ni en cualquier otra parte". Poco antes, agentes del servicio secreto habían detenido temporalmente a cinco miembros del Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño (CISPES), quienes arrojaron dólares manchados con pintura roja al paso de la caravana de Cristiani.

Tras dos horas de conversaciones entre ambos mandatarios, Bush inició una ronda de declaraciones a la prensa, en los jardines de la Casa Blanca. No habló de dólares, pero manifestó categóricamente su "apoyo total" al presidente Cristiani. Una vez más, reafirmó a los periodistas: "no se confundan respecto al apoyo de este gobierno al presidente Cristiani. Es fuerte". Asimismo, exhortó al FMLN a volver a la mesa de negociaciones "y quedarse allí hasta que se llegue a un alto al fuego". También se desbordó en elogios sobre la personalidad del presidente Cristiani y sobre los presuntos avances conseguidos bajo su gestión por la "democracia" en El Salvador. Aseguró que la sociedad salvadoreña "goza de libertad de expresión como nunca antes. Se ha mejorado el sistema judicial y también la autoridad judicial y policial. Y se ha comprometido a una reducción drástica de la Fuerza Armada y la profesión de los derechos humanos". No obstante, en el marco de los elogios, recordó a Cristiani que el caso de la masacre de la UCA seguía pendiente y lo comprometió a resolverlo: pronto se iniciará el juicio de los acusados de los asesinatos de los jesuitas en 1989 y sabemos que usted tomará las medidas necesarias para que se haga justicia en este despreciable crimen".

Por su parte, tras la entrevista, el secretario de Estado para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, declaró que Cristiani, en contra de lo que algunos sectores de la prensa habían presumido cuando se informó sobre su visita, no solicitó a Bush el envío de los 42.5 millones de dólares de asistencia militar, aprobada para 1991, pero todavía no desembolsada. No obstante, Aronson añadió que "obviamente, no podemos permitir que el

gobierno salvadoreño pierda su capacidad para defenderse en momentos en que los guerrilleros están intensificando la guerra". Luego de la entrevista en la oficina oval, y de la ronda con la prensa, los presidentes Cristiani y Bush almorzaron en el salón Roosevelt de la Casa Blanca. A tempranas horas de la tarde, Cristiani se entrevistó por espacio de 45 minutos, en *Blair House*, con el secretario de defensa, Richard Cheney. También se entrevistó con el jefe del estado mayor conjunto del ejército norteamericano, general Colin Powell. A propósito de ambas entrevistas, los analistas del caso salvadoreño llamaron la atención sobre el hecho de que Cristiani no se hiciera acompañar del Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, ni de ningún otro militar salvadoreño. Luego siguieron varias rondas de entrevistas con los medios televisivos y, por la noche, Cristiani remató esa jornada con otra cena con miembros del Congreso.

El último día de su visita, en la mañana del jueves 13, lo inició con un desayuno de trabajo con la prensa. Cristiani aprovechó la ocasión para reiterar denuncias previas del gobierno de Bush sobre la presunta adquisición, por parte del FMLN, de misiles antiaéreos *SAM-16*, presumiblemente provistos por Cuba. También aseguró que los negociadores del FMLN viajaban rutinariamente a Cuba, después de cada ronda de conversaciones con el gobierno salvadoreño; y denunció que "elementos del Frente Sandinista" continuaban suministrando ayuda militar al FMLN. No obstante ello, por otra parte, opinó que tal vez para septiembre próximo podría concertarse un acuerdo de cese del fuego con el FMLN. Más tarde, se reunió brevemente con el vicepresidente Dan Quayle, y luego partió de regreso a El Salvador. A su arribo al aeropuerto de Comalapa, reiteró que "el proceso de conversaciones con el FMLN es irreversible y tarde o temprano el cese al fuego tendrá que darse".

Por su lado, el FMLN prosiguió sus contactos bilaterales con las fuerzas sociales y políticas del país. El miércoles 12 de junio, representantes de la comandancia general se reunieron en México con una delegación del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz (CPDN). Según lo de-

claró posteriormente el empresario Ramón Díaz Bach, miembro del CPDN, el comandante Shafick Handal les habría asegurado que el FMLN ya no usaría los "tepezcuintles", por imprecisos, y que también se había comprometido a no quemar más buses ni emplear coches-bomba. El viernes 14, también en México, el FMLN se reunió con una delegación de los partidos políticos. Paralelamente, el comandante Joaquín Villalobos, quien no estuvo presente en la ronda de Caraballeda, llevaba a cabo una gira diplomática por Europa.

El 10 de junio, Villalobos fue recibido en Madrid por el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Antonio Fernández Ordóñez. El 13, en Estrasburgo, expuso ante el parlamento europeo la posición del FMLN sobre el proceso de negociaciones. El 14, se reunió con funcionarios del ministerio alemán de asuntos exteriores y con los líderes del partido Social Demócrata, a quienes habría causado "una buena impresión conciliadora", según fuentes diplomáticas acreditadas en Bonn. El 15, en una entrevista difundida por la *Voz de Alemania*, afirmó que el proceso de diálogo con el gobierno salvadoreño se encontraba en una situación "altamente positiva", si bien persistían algunos "aspectos críticos" en los temas de Fuerza Armada y cese del fuego. "No sería políticamente lógico —arguyó— que un ejército que asesinó a los jesuitas, ha cometido tantas violaciones de los derechos humanos y carece de la suficiente autoridad moral, política y militar, termine convirtiéndose en el componente militar de la sociedad salvadoreña". Finalmente, al término de su visita a Alemania, el 17 de junio, declaró a la agencia alemana de prensa (DPA) que "la negociación ha salido de su fase formal para entrar ahora en una etapa sustantiva y seria, lo que vuelve más complicadas las discusiones". Indicó que, aunque el proceso es irreversible, "la negociación toca intereses concretos, afecta a individuos y a instituciones". Ante la situación de empate militar, exhortó a la Fuerza Armada y al gobierno a "aceptar las consecuencias de no haber podido ganar la guerra". Por otra parte, manifestó que el FMLN tiene "la impresión de que Estados Unidos está interesado en una solución negociada. Pero nos preocupa que su visión sea extremadamente

ideológica con respecto a los problemas de El Salvador. Los Estados Unidos tienen metido en la cabeza que el asunto es destruir al FMLN. Y creo que deberían ser más pragmáticos y darse cuenta de que, en términos de democratización y de modernización económica en El Salvador, quizá tengan mucho más coincidencias con nosotros que con un ejército al que financió durante diez años y cometió un asesinato como el de los jesuitas”.

Entre tanto, el nuevo *impasse* sobre los temas de cese del fuego y Fuerza Armada en la ronda de Caraballeda propició el endurecimiento de las posturas de ambas partes. El propio Cristiani, en el informe sobre su segundo año de labores, leído el 1 de junio ante la asamblea legislativa, enfatizó que, “en nuestra calidad de comandante general de la Fuerza Armada, deseamos reiterar y dejar claramente establecido, que en el proceso de negociaciones que actualmente se lleva a cabo, no está en juego la existencia misma de la Fuerza Armada, que seguirá siendo el único brazo armado del pueblo salvadoreño”. “La institución armada —subrayó— es un baluarte para la preservación de la institucionalidad de nuestra patria, lo cual le ha significado una mayor identificación con los intereses y anhelos del pueblo, en un marco de apoliticidad y de fiel cumplimiento a sus obligaciones constitucionales”. El 5 de junio, Cristiani reiteró que “la disolución de la Fuerza Armada no es negociable, y menos con el FMLN”. A la vez, advirtió que “nosotros no queremos guerra, sino la paz, pero las concesiones que por este anhelo se hagan, no deben tomarse como un signo de debilidad, y que le quede bien claro al FMLN que si quiere guerra, guerra va a tener”.

La cuestión de los misiles se constituyó una vez más en un eje de airados intercambios verbales. Después de sus declaraciones del 7 de junio, en San Salvador, y del 13 de junio, en Washington, Cristiani volvió a la carga el 15 de junio, durante una entrevista concedida a la cadena *CNN*. De manera más categórica que en sus denuncias previas, acusó otra vez a Cuba de enviar misiles *SAM-16* al FMLN, a través de Nicaragua, con la presunta colaboración del ejército de ese país, controlado todavía por los sandinistas, sin que la presidente Violeta de Chamorro pudiera hacer de-

masiado para evitarlo. En la más acendrada tradición anticomunista de ARENA, afirmó también que “Castro es prácticamente la raíz del problema... él fue el que empezó a exportar todas estas revoluciones marxistas por todo el continente, al menos en Centro y Sudamérica, y sigue apoyándolas, aunque menos, debido al fracaso de su propio sistema”.

La respuesta del FMLN a tales señalamientos fue categórica. El comandante Leonel González consideró que dichas acusaciones formaban parte de una “campaña de Washington para aislar a Cuba”, de manera análoga a como en su oportunidad el gobierno de Reagan levantó campañas contra los sandinistas para justificar “la agresión contra el pueblo de Nicaragua”. Asimismo, González indicó que las fuentes de abastecimiento bélico del FMLN son diversas y recordó que en el pasado reciente los propios norteamericanos introdujeron centenares de toneladas de armamentos que aún permanecen en la región. Por su parte, en un comunicado difundido en La Habana, el 17 de junio, la cancillería cubana aseguró que “el gobierno de Cuba en ningún momento anterior o posterior a la coyuntura aludida ha suministrado tales armamentos al FMLN ni a nadie”. No obstante, a la vez expresó que “Cuba no renuncia, no renunciará, ni tiene por qué ocultar o disimular los profundos nexos de fraternidad y solidaridad que unen a nuestro pueblo y a los patriotas salvadoreños, que han librado una heroica lucha contra un ejército armado y entrenado por Estados Unidos”; y subrayó que Estados Unidos carece de todo derecho para “juzgar la política exterior de Cuba y condicionar sus vínculos con el FMLN”.

A nivel militar, esta escalada de la confrontación verbal se tradujo en un sobreesfuerzo bélico de ambas partes para ablandar la posición del contrario. El ejército intensificó su presión sobre las áreas de predominio insurgente, con el aparente propósito de confinar al FMLN en las zonas montañosas y despobladas. Para ello, desde el punto de vista estrictamente operativo, utilizó con mayor discreción el apoyo aéreo —sobre todo de helicópteros— y echó mano de su superioridad numérica, sobresaturando con efectivos las áreas de los operativos de rastreo y desalojo.

La actividad militar durante la primera quincena de junio, entre el final de la ronda de Caraballeda y el inicio de la de Querétaro, arrojó un saldo de 35 combates de encuentro y 19 ataques rebeldes en once departamentos del país, distribuidos así: Chalatenango, 15 combates de encuentro; San Vicente, 6 combates y 1 ataque; Usulután, 6 combates y 1 ataque; San Miguel, 2 ataques y 1 combate; Morazán, 1 combate y 1 ataque; La Unión, 1 combate; Cuscatlán, 2 combates y 2 ataques; Cabañas, 1 ataque; San Salvador, 3 combates y 7 ataques; La Libertad, 2 ataques; y Sonsonate, 2 ataques. Estas acciones dejaron un saldo de 39 bajas (13 muertos y 26 heridos) en las filas de la Fuerza Armada y 42 bajas (34 muertos y 8 heridos) en las del FMLN.

Las zonas urbana y suburbana de San Salvador fueron una vez más escenario de una intensa movilización insurgente. El 11 de junio, en horas de la madrugada, los comandos urbanos atacaron la casa cuartel de la defensa civil de Mejicanos. Al día siguiente, a tempranas horas de la noche, realizaron un nuevo ataque contra la Torre Democracia, con disparos de lanzacohetes *RPG-7*. En la acción rebelde resultaron heridos dos soldados. Una hora después, se suscitó, en la colonia Cumbres de Cuscatlán, en las proximidades de la Torre, un choque armado con tropas que perseguían a los comandos urbanos.

El 15 de junio, el FMLN realizó un nuevo hostigamiento contra el puesto de vigilancia del Regimiento de Caballería, que custodiaba los tanques de agua de "Holanda", localizados en la colonia Dolores, en San Salvador. En la acción resultaron heridos dos soldados y un oficial. Asimismo, perecieron dos comandos urbanos y otro más resultó gravemente lesionado cuando en la retirada chocaron con efectivos de la Policía Nacional, en la colonia Vista Hermosa. En respuesta a la muerte de sus dos combatientes, a primeras horas del día siguiente, los comandos urbanos dieron muerte al capitán Carlos Alfredo López Avilés, poco después de que éste saliera de su residencia, en la urbanización La Cima, en el mismo sector donde ocurrieron los hechos del día anterior.

El 17 de junio, por la noche, un importante contingente de fuerzas guerrilleras lanzó un nuevo

ataque contra las instalaciones de la penitenciaría "La Esperanza", el principal centro de reclusión penal del país, ubicado en el cantón San Luis Mariona, en la jurisdicción de Mejicanos, al norte de San Salvador. El FMLN empezó por dinamitar varias estructuras de distribución eléctrica de la zona, dejándola completamente a oscuras. En el ataque, utilizó fuego de fusilería, morteros de 81 mm y lanzacohetes *RPG-7*. Durante la acción, los rebeldes detonaron una potente carga de dinamita en una de las paredes del costado sur del penal, abriendo un boquete por el cual se fugaron 132 reos, 35 de ellos políticos y los restantes 97 comunes. Los combates se prolongaron por aproximadamente seis horas. Las cifras preliminares sobre el saldo de víctimas fueron confusas. El Ministerio de Justicia informó de por lo menos 10 muertos. Algunas fuentes periodísticas hablaron de 13 muertos: 5 reos, 5 guerrilleros, 2 soldados y 1 civil; otras fuentes informaron que los muertos fueron 15: 9 reclusos, 4 guerrilleros y 2 efectivos militares. Posteriormente, familiares de algunos de los reclusos muertos denunciaron que éstos fueron asesinados por los propios vigilantes de la prisión, para evitar que escaparan, aprovechando la confusión. De hecho, tras el asalto y la fuga masiva, un grupo de reos se amotinó, pero fueron rápidamente sofocados por los efectivos militares y los vigilantes del penal. Asimismo, la prensa registró por lo menos 12 heridos: 5 militares, 3 vigilantes y 4 civiles, entre éstos una menor de edad, quienes habitaban en las inmediaciones del penal.

Tanto el asesinato del capitán López Avilés, perpetrado el día en que se inició la ronda de Querétaro, como el ataque a Mariona, efectuado el segundo día de las conversaciones, fueron calificados por el gobierno salvadoreño como una "abierto provocación" del FMLN contra las negociaciones, pero no obstante el malestar gubernamental, éstas prosiguieron sin mayores contratiempos e incluso en un clima de relativo optimismo, a juzgar por las declaraciones de ambas partes y del propio mediador de la ONU.

A su arribo a México, el 13 de junio, para participar en la ronda, el comandante Leonel González afirmó que 1991 sería "el año de la paz", al tiempo que aseguró que el FMLN acudía a dicho

encuentro con la voluntad de alcanzar "acuerdos sustanciales". Más tarde, también el comandante Shafick Handal subrayó que 1991 "debe ser el año de la paz"; mientras en Alemania, Joaquín Villalobos declaraba que "la negociación ha salido de su fase formal para entrar ahora en una etapa sustantiva y seria". "Creo —indicó Villalobos el día 16— que los acuerdos se van a producir pronto, aunque no van a entrar en vigencia en forma automática. El proceso es irreversible y nadie puede echarse atrás ahora. Se le puso tiempo a la guerra. Está claro que cada minuto cuenta para llegar a un acuerdo y estamos obligados a llegar a él". En concreto, sobre la ronda de Querétaro, Villalobos indicó que "vamos con voluntad de alcanzar el cese de fuego en esta reunión. Incluso van a participar más jefes militares nuestros que tienen que ver con la parte técnica".

El 17 de junio, el segundo día de conversaciones, el portavoz de la comisión gubernamental, Dr. Oscar Santamaría, aseguró que "hemos evacuado el tema de la Fuerza Armada en un 95 por ciento y estamos convencidos de poder llegar a un acuerdo". A la vez, indicó que "hay un consenso en las dos partes de que los temas cese de fuego y Fuerza Armada, por estar íntimamente vinculados, no pueden darse aisladamente el uno del otro, sino que deben darse juntos". Significativamente, la delegación guerrillera no refutó las apreciaciones del Dr. Santamaría. El comandante Handal declaró que "potencialmente ésta podría ser la última o penúltima reunión... Si esta ronda avanza, el proceso negociador será totalmente irreversible, sólo faltarían asuntos operativos". No obstante, Handal resaltó que el 5 por ciento pendiente tenía una importancia cualitativa muy grande, ya que englobaba aspectos como la depuración de la Fuerza Armada y la creación de la policía nacional civil. Por su parte, la comandante Ana Guadalupe Martínez enfatizó que "la base está. Estamos de acuerdo en que hay que reestructurar la Fuerza Armada, que hay que crear una nueva policía, controlada por el poder civil, y que se debe investigar los casos más flagrantes de violaciones a los derechos humanos. El problema es el cómo. Lo que nos hace falta acordar es cómo se va a hacer todo eso".

El 19, al cuarto día de sesiones, Santamaría

reiteró que tanto ambas partes como la ONU coincidían en que el tema de la reestructuración de la Fuerza Armada ya "está agotado" y "estamos en las puertas de acuerdos finales", mientras que el tema del cese del fuego lo habían discutido "en su integralidad" y habían avanzado "enormemente". Una vez más, Santamaría insistió: "estamos llegando a la proximidad de estas decisiones cruciales y podría ser que estos acuerdos se logren en ésta, o en la próxima reunión". Indicó que, en algunos puntos, "hemos tenido coincidencias de fondo", pero admitió también que aún restaba discutir "algunos puntos divergentes que hay que superar" sobre el futuro de la Fuerza Armada, y que persistían "divergencias en cuanto a procedimiento, forma y tiempos". Con todo, aclaró que esas divergencias no constituían "posiciones inamovibles". Por ejemplo, admitió que el gobierno prefiriera hablar de "evaluación" que de "depuración" de la Fuerza Armada, porque este término le parece "peyorativo", pero no hay divergencia en cuanto al concepto de fondo, sino en cuestiones de "forma o mecánica".

El viernes 21, Alvaro de Soto manifestó que su evaluación del encuentro era "positiva" a pesar de que el proceso negociador "ha demorado mucho más de lo que la gente esperaba... Este es un proceso en donde el hecho de que no se firmen acuerdos no significa que no se esté avanzando", puntualizó. A modo de justificación por la falta de acuerdos, De Soto agregó que "lo que pasa es que hemos llegado a una etapa de la negociación en que es muy difícil desglosar aspectos y producir acuerdos aislados... En esta fase es muy difícil tomar un pedazo de lo que se está negociando y sacarlo de contexto para producir un acuerdo. Todo está ligado y nada está acordado en el aspecto formal hasta que no esté acordado todo". Por ejemplo, especificó, es difícil "que el gobierno acepte realizar reformas en el tema de Fuerza Armada, que tanto interesa al FMLN, si no es en el marco del cese del fuego; como también es difícil pensar que el FMLN va a aceptar llegar a un acuerdo de cese del fuego si no hay una reforma de la Fuerza Armada". Asimismo, recordó que el proceso de negociación pretendía "no solamente poner fin al conflicto armado, sino también demo-

cratizar al país, garantizar el respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña", lo cual lo hacía mucho más complejo que si sólo se tratara de acallar las armas. También reiteró que el tema de la Fuerza Armada seguía siendo "el más espinoso en cuanto a sus aspectos sustantivos", y calificó el cese del fuego como una cuestión "extraordinariamente complicada", porque el problema "no es separar las fuerzas de dos estados en situación de combate en una zona fronteriza", sino "establecer arreglos prácticos para separar dos fuerzas dentro del territorio de un Estado soberano, sin crear una división dentro de ese territorio, y aquí se tiene que hablar de espacios geográficos que es un terreno muy sensible".

A pesar de los consensos generados sobre la necesidad de depurar y reestructurar al ejército, la ronda concluyó sin que las partes lograran superar sus divergencias sobre la mecánica adecuada para materializar dichos consensos. Los últimos cuatro días de la reunión se consumieron en discutir la disolución de los cuerpos de seguridad y la creación de la nueva policía nacional civil. Esta contraposición de criterios entre ambas partes salió a relucir el 22 de junio, al término del encuentro, cuando Santamaría irrumpió en una conferencia que los comandantes Shafick Handal y Leonel González daban a la prensa. Mientras éstos calificaron la ronda como "útil para el proceso de negociación", Santamaría afirmó que "no estamos conformes con lo que se logró", al tiempo que responsabilizó al FMLN de obstaculizar la firma de un acuerdo global final al querer rediscutir temas ya superados e intentar incorporar a la agenda puntos nuevos, utilizando "tácticas de estrategia de tiempo para alargar la discusión" con el propósito de hacer frente al creciente divisionismo que el curso de las negociaciones estaba generando en sus filas. "No queremos seguir en este diálogo turístico", concluyó. Ante los exabruptos del ministro, el comandante Shafick Handal replicó que lo afirmado por Santamaría "es una mentira y no es congruente con el ambiente que aquí ha habido. No sé con qué intención el doctor Santamaría quiere ahora enturbiar las cosas que habían terminado bien". Por su parte, el comandante González acusó a la delegación gubernamental de no haber

querido tocar el tema de la impunidad y la depuración del ejército.

El mediador de la ONU, situado por encima de esta polémica, opinó que, a partir de los acuerdos de México (27 de abril), el proceso había entrado en "un momento definitorio" por lo que "difícilmente será reversible". El 24 de junio, en San Salvador, a donde viajó para reunirse con Cristiani, De Soto reiteró que "hay muchos componentes de lo que podría llegar a ser un acuerdo en el tema del cese del fuego, ya que las dificultades y los problemas de fondo están identificados" e incluso "en términos de redacción se ha progresado bastante". En la misma tónica, el propio Cristiani comentó que "se está avanzando en las conversaciones con el FMLN y únicamente están quedando los temas más difíciles y ya falta poco para lograr un acuerdo global para el cese del fuego y esto será en un futuro próximo".

La comunidad internacional, en conjunto, continuó dando un importante apoyo al proceso de negociaciones. El 21 de junio, como un gesto más de ese apoyo, la asamblea general de la ONU aprobó el presupuesto para la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), por un monto de aproximadamente 13 millones de dólares para un período inicial de seis meses, prorrogables por seis meses más. En cambio, el gobierno de Bush prosiguió enviando más señales equivocadas al ejército salvadoreño. El 27 de junio, desoyendo los consejos de los sectores más sensatos del Congreso norteamericano, Bush decidió desembolsar 21 millones de dólares de la ayuda militar retenida, aduciendo que el FMLN continuaba abasteciéndose de armas sofisticadas y no estaba negociando con seriedad.

A la sombra de las vicisitudes del proceso de negociaciones, un eje menor de conflictividad, en la segunda quincena del mes, lo constituyó una nueva confrontación verbal entre las principales organizaciones corporativas de la empresa privada y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), a raíz de las fuertes críticas que el presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CCIES), Ricardo Montenegro, formuló el 21 de junio contra un nuevo incremento del 30 por cien-

to de las tarifas de la energía eléctrica, anunciado por la CEL. En conferencia de prensa, acompañado de otros personeros de la Cámara, Montenegro sugirió la elaboración de "un diagnóstico, una estrategia, un esquema técnico financiero de CEL a mediano plazo que dé soluciones verdaderas a los problemas de esa institución", y solicitó a la administración de dicha entidad que diese a conocer públicamente sus gastos y libros contables, tal como lo había demandado la empresa privada en anteriores ocasiones, sin obtener respuesta afirmativa de la CEL. Por otra parte, Montenegro recomendó que la administración de la CEL no le fuese encomendada a políticos, ya que "a estas personas les cuesta mucho más tomar decisiones porque ellos piensan en votos, mientras que alguien que no sea político las toma más rápido y sin ningún compromiso".

El 24, la CEL emitió un amplio comunicado, en el cual, tras poner en duda que las declaraciones de Montenegro representaran la posición institucional de la CCIES, recordó que "la CEL está sujeta por ley a dos auditorías externas independientes y a la fiscalización de la Corte de Cuentas", pero que, no obstante ello, estaba "dispuesta a discutir sus finanzas y su política de expansión en cualquier momento", y a aprovechar la ocasión para revisar "simultáneamente el porcentaje que el costo de la energía eléctrica representa dentro de los costos primos de los diferentes bienes y servicios que se venden en la plaza nacional, por tipo de negocio, así como el efecto que tiene el incremento tarifario sobre los mencionados costos y las políticas básicas de determinación de precios al público que utilizan las empresas para trasladar a sus clientes el aumento; de este modo se pueden buscar mecanismos menos sensibles al consumidor". Por otra parte, la CEL rechazó que algún funcionario ejecutivo suyo hubiese sido nombrado "con criterio político".

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), como máxima cúpula empresarial del país, se vio motivada a terciar en la disputa, con el ánimo de despejar todas las dudas de la CEL sobre la posición de los empresarios. En un comunicado emitido el día 25, la ANEP enfatizó que "la expresión del presidente de una asociación gre-

mial, miembro de la cúpula empresarial, es la voz autorizada del pensamiento de la misma gremial y por lo tanto, es un grave error considerar sus declaraciones de carácter personalista... Los dirigentes de la Cámara de Comercio —seguía la ANEP— se han hecho eco de una legítima preocupación del sector productivo y de la población en general, por ese nuevo incremento a las tarifas eléctricas, dada su incidencia adversa en la actividad económica y en los precios de los bienes y servicios. La ANEP está consciente del problema que enfrenta la CEL con los sabotajes que ha sufrido la red del tendido eléctrico por parte del FMLN durante más de once años, pero a la vez considera que no es meramente con incrementos periódicos a las tarifas eléctricas como se puede resolver la situación. Nos preocupa en este caso la ausencia de un programa y una estrategia para cubrir no sólo las demandas actuales del fluido eléctrico y las necesidades futuras, sino también la falta de una verdadera austeridad y eficiencia en el uso de los recursos, lo cual parece ser un mal endémico en toda la administración pública... Creemos —continuaba— que la Cámara de Comercio, como cualquier otra entidad o persona, está en su legítimo derecho de cuestionar decisiones como la de CEL, de aumentar desmesurada y abruptamente las tarifas del servicio eléctrico, pues con ello no sólo se hace cargo de velar por los intereses de sus agremiados que forman parte del sector productivo, sobre cuyos hombros descansa el desenvolvimiento económico del país, sino que también defiende los intereses de la población en general, que ve recargarse el presupuesto familiar". Finalmente, la ANEP se mostraba de "acuerdo en que una institución como CEL, debe ser manejada con criterios técnicos y no políticos, siendo indudablemente éste otro de los factores que contribuyen a la crisis en que se encuentra. Para solucionar estos problemas y enfrentar los desafíos que se le presentan al país en materia energética, ANEP propone la creación de una Comisión Nacional de Energía con la participación de representantes del sector privado, para que planifique y desarrolle una estrategia de largo plazo".

En otro orden de acontecimientos, el viernes 14 de junio concluyó, en La Haya, la fase oral del diferendo limítrofe que los gobiernos de Honduras

y de El Salvador presentaron a la consideración de la Corte Internacional de Justicia desde finales de 1986. La sesión de ese día estuvo dedicada a la lectura de conclusiones, así como a la ratificación, por parte de los representantes de ambos gobiernos, de su petición a la Corte Internacional para que ésta delimite la frontera en los espacios terrestres e insulares en disputa y determine la situación jurídica de las aguas del golfo de Fonseca y de los espacios marítimos adyacentes (mar territorial, plataforma continental y doscientas millas marítimas) sobre el Océano Pacífico.

La sesión del día anterior se dedicó, en su primera parte, a la última contestación de El Salvador a Honduras sobre aspectos relativos a la disputa marítima. En la segunda parte intervino la representación de Nicaragua, cuyo gobierno solicitó a la Corte participar en el litigio para proteger sus derechos en el golfo y en los espacios marítimos adyacentes. Fue la segunda intervención de Nicaragua en la vista oral del diferendo.

La fase oral —última etapa del diferendo— se inició el 15 de abril anterior con la discusión del objeto del litigio y del derecho aplicable y prosiguió con el debate sobre la línea fronteriza en los seis sectores no delimitados por el Tratado General de Paz firmado en Lima (Perú), el 10 de di-

ciembre de 1980: Tepansigtlir (Montecristo, Citalá), Las Pilas (Cayaguanca), Arcatao (Zazalapa), Nahuaterique (Perquín, Sabanetas), Polorós (Monteca) y el delta del Goascorán, que en conjunto suman unos 430 kilómetros cuadrados, así como sobre las islas del golfo de Fonseca y las aguas interiores y exteriores adyacentes.

A juzgar por las declaraciones que la delegación salvadoreña formuló a la prensa a su regreso de La Haya, El Salvador abriga grandes esperanzas de que el fallo de la Corte Internacional le sea favorable. Según el canciller José Manuel Pacas Castro, El Salvador habría demostrado taxativamente ante la Corte sus derechos sobre 32 islas del golfo, incluidas Meanguera y Meanguerita (el gobierno salvadoreño sólo reconoce la posesión de Honduras sobre la isla de Zacate Grande; y la de Nicaragua sobre la de Farallones), apoyado sobre abundantes y sólidas pruebas y documentos históricos, mientras que, en cambio, "la delegación hondureña se limitó a tratar de restar validez a los argumentos salvadoreños". De acuerdo a fuentes diplomáticas consultadas en La Haya, la sentencia de la Corte Internacional demorará por lo menos hasta principios de 1992, y será de carácter inapelable.